

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL
MG. DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
E.S.D

DEMANDANTE: SIGIFREDO SIERRA BELTRAN
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
-COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
RADICADO: 11001310503220230028001
REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

KATHERINE MARTINEZ ROA, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cedula de ciudadanía No. 67.002.371 de Cali, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 129.961 del C.S. de la J., y actuando en nombre y representación del señor SIGIFREDO SIERRA BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.275.384 de Bogotá, mediante el presente escrito me permito presentar mis **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**, de la siguiente manera:

En primer lugar, Honorables Magistrados, solicito de manera cordial y respetuosa revocar el auto del 27 de octubre de 2023, mediante el cual el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, RECHAZO la demanda al considerar que la misma no cumple con las correcciones solicitadas al momento de ser inadmitida y en su lugar se dé por subsanada la misma y se proceda a su admisión, bajo las siguientes consideraciones:

- **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RECHAZAR LA DEMANDA:**

El Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, en auto del 06 de octubre de 2023, inadmitió la demanda y ordeno:

- *“RETIRESE o ADECÚESE la pretensión 4 de las condenas, ya que los perjuicios que se pretenden sean indemnizados solo podrían configurarse una vez se cumplan los requisitos para solicitar la pensión, lo que aún no ha ocurrido, puesto que de la revisión preliminar se puede ver que el demandante no tiene la edad para solicitar la pensión.*
- *RETIRESE o ADECÚESE la pretensión 7 de las condenas, ya que los*

intereses pretendidos solo podrían generarse con posterioridad al reconocimiento de la prestación, lo que no ha ocurrido y además dichos intereses solo se predicen respecto de la persona jurídica encargada de pagar la prestación.”

Ante este punto, me permito indicar a la Sala y como se indicó al Juzgado 32 Laboral en escrito radicado el 11 de octubre de 2023, la suscrita cumplió con los requerimientos establecidos en el Art. 25 del CPT y SS, que reza lo siguiente:

“ARTICULO 25. FORMA Y REQUISITOS DE LA DEMANDA. La demanda deberá contener:

- 1. La designación del juez a quien se dirige.*
- 2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.*
- 3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.*
- 4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 5. La indicación de la clase de proceso.*
- 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.***
- 7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.*
- 8. Los fundamentos y razones de derecho.*
- 9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y*
- 10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.*

Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo.” (subrayado fuera del texto original)

Es preciso traer a colación las consideraciones del auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, bajo ponencia de la Magistrada Ana Lucia Caicedo, dentro del proceso 66001310500220190015001:

“El exceso ritual manifiesto, como tantas veces lo ha enseñado la Corte Constitucional, resulta contrario a los postulados del debido proceso consagrados en el artículo 29 de la C.N., en tanto se revela contrario a la prevalencia del derecho sustantivo ordenada en el artículo 228 de la C.N. Desde esta perspectiva, conviene precisar, sin embargo, que la primacía del

derecho sustancial no implica en modo alguno un relevo de las cargas impuestas por la ley a las partes. Lo que este principio dicta, conforme lo ha precisado la propia jurisprudencia de los distintos órganos de cierre, es que el administrador de justicia deba interpretar las demandas, los actos procesales y las pruebas que no ofrezcan la claridad suficiente para poner en marcha el proceso, lo cual es consecuente con el deber de administrar justicia consagrado en la constitución y con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo, como se ha dicho.

A propósito de lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia del 15/MAY/de 2012 (T- 352/2012), manifestó que el derecho fundamental de acceso a la justicia se ve lesionado no sólo cuando se desconocen las formas propias de cada juicio; sino también cuando el juez se excede en ritualismos, en virtud de lo cual se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los individuos por motivos formales. Así, precisó que existen dos tipos de defectos procedimentales: uno denominado defecto procedimental absoluto, y el otro que es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El defecto procedimental absoluto se configura cuando “el juez se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de las partes”.

A propósito de este último defecto, precisó que también se estructura por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; es decir: “el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.”

Así mismo, en auto proferido por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, en ponencia de la Magistrada Dra. Marleny Rueda bajo radicado 22-2021-486-01, señalo:

“Entonces, a modo de síntesis, la Sala considera que (i) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera

denegación de justicia; (ii) si bien los jueces gozan de libertad para valorar

el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas excesivas o imposibles de cumplir para las partes; y, (iii) generalmente el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso judicial”

Y es que para la Sala en verdad no se justifica el rechazo de la demanda, sin tan siquiera verificar si se subsanó o no la demanda, lo que evidentemente se hace solo al resolver el recurso de reposición en donde se hubiera podido observar que la inadmisión no tenía soporte alguno, pues basta se itera una lectura de la misma para saber que se cumplió no solo con lo establecido en el art 25 del C P del T y de la SS, sino que es posible dar aplicación a lo establecido en el art 25 A del mismo ordenamiento.

Es bueno nuevamente recordar que es en el artículo 25 del C P del T y de la S.S. en donde se consagran los requisitos de la demanda y que debe el juez al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del mismo ordenamiento otorgar cinco días al demandante para que la subsane, pero ninguna norma procesal contempla una interpretación tan peculiar, cuando el derecho laboral, es en verdad un derecho social que impone al Juez entre otros deberes el de una correcta interpretación de la demanda.”

Una vez revisados los puntos endilgados por subsanar frente al acápite de pretensiones condenatorias en los numerales 4 y 7, los mismos se están presentando de manera clara, precisa y de manera separada de acuerdo al numeral 6 del art. 25 del CPT y S.S. y la no eliminación de la misma no puede ser causal para ser inadmitida, pues las mismas pueden decidirse con la sentencia que ponga fin al proceso.

Es por los anteriores argumentos que solicito a la Honorable Sala de decisión se revoque el auto del 27 de octubre de 2023, mediante el cual el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá, RECHAZO la demanda al considerar que la misma no cumple con las correcciones solicitadas al momento de ser inadmitida y en su lugar se dé por subsanada la misma y se de por admitida la misma.

La suscrita y el demandante pueden ser notificadas en el correo electrónico



Bogotá
Cll. 18 # 6-56 / Of. 505
Edificio Caribe
Tel: 601 2841055

Cali
Cra. 4 # 11-33 / Of. 301
Edificio Ulpiano Lloreda
Tel: 602 5242363

imperaabogados.com

katherinemartinezroa@imperaabogados.com.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Katherine Martínez Roa". The signature is written over a light blue rectangular box that contains the text "1e36b55ac4...".

KATHERINE MARTÍNEZ ROA

C.C. 67.002.371 de Cali

T.P. 129.961 del C.S. de la J.

María Alejandra Cifuentes Vargas